Santiago de Cali, {diaActual} de {mesActual} del {añoActual}

Señores:

**{nombreEmpresa}**

NIT. {nitEmpresa}

{direccionEmpresa}

{#correos}{correoEmpresa}{/correos}

{telefonoEmpresa}

***Asunto: Reclamación Responsabilidad Civil Extracontractual***

**LINA MARÍA BENÍTEZ FREYRE** identificada como aparece al pie de mi firma en mi calidad de apoderada de {**propietarioPrimerVehiculo**}**,** conforme al poder que se anexa a este documento, de manera respetuosa me permito presentar ante ustedes **RECLAMACIÓN FORMAL** por el pago de perjuicios, con fundamento en los siguientes:

**HECHOS**

{#hechos}

{descripcionHecho}

{%fotoHecho}

{/hechos}

Con fundamento en lo anterior, nos permitimos realizar la siguiente:

# SOLICITUD

De manera respetuosa solicitamos que **{propietarioSegundoVehiculo}** cancele a favor {propietarioPrimerVehiculo} la suma de **$ {cuantia}** **pesos** por concepto del deducible asumido a raíz del accidente de tránsito en mención.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

***Responsabilidad Civil Extracontractual por Actividades Peligrosas***

El artículo **2341**del Código Civil establece que quien cometa un delito o culpa, y con ello le genere un daño a otro, se encuentra obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.

En lo que respecta puntualmente a la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, esta se origina en el ejercicio de una actividad que genera un riesgo mayor al que normalmente están expuestas las personas. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido en forma pacífica que la conducción de vehículos automotores es una actividad considerada como peligrosa. Lo anterior, debido al alto nivel de riesgo que implica su ejercicio.

Ahora bien, en concordancia con el desarrollo jurisprudencial colombiano, con base en artículos como el 2356 (presunción de culpa en actividades peligrosas), **2347**y **2349**del Código civil (Responsabilidad indirecta por el hecho de empleado o personas a cargo) se establece todo un régimen de responsabilidad aplicado no solo a la persona principal que ejerce el hecho dañoso sino a terceros que tienen un deber de guarda o dominio y son solidariamente responsables en casos específicos.

De esta forma, La Corte Suprema de Justicia, en la **Sentencia del 13 de marzo de 2008 (Exp. 9327),** reafirmó que la responsabilidad en casos de actividades peligrosas, recae sobre quien ostenta la condición de guardián, es decir, quien detenta el poder de mando, dirección y control sobre la actividad en el momento en que ocurre el daño.

Asimismo, según la doctrina establecida en la **Sentencia del 22 de abril de 1997 (Exp. 5743),** la responsabilidad no se desplaza automáticamente con la venta del vehículo o la externalización de la actividad, si la empresa continúa obteniendo un beneficio económico de la misma. Ahora bien pese a no ser la propietaria directa del vehículo involucrado en el siniestro o la actividad principal de la empresa no sea el transporte, mantiene un claro vínculo económico con la actividad que generó el daño, toda vez que, asi la entidad no tenga como actividad principal el transporte, utiliza vehículos en sus operaciones y sigue obteniendo beneficios de esta actividad, generando así la actividad peligrosa. Este vínculo económico no la exime de responsabilidad, ya que, conforme a la doctrina expuesta por la Corte Suprema, la simple transferencia de la propiedad o la tercerización de la actividad no desplaza automáticamente la responsabilidad civil, si la empresa responsable sigue beneficiándose de la operación que ocasionó el perjuicio.

En conclusión, en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual en Colombia, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema como la normativa vigente establecen que la responsabilidad por daños en actividades peligrosas recae sobre quienes detentan el control, dirección y obtienen un beneficio económico de la actividad, independientemente de la propiedad directa de los bienes involucrados. Las empresas que conservan influencia y provecho económico en actividades riesgosas, como la operación de vehículos  pueden ser solidariamente responsables por los daños causados, debiendo responder por ellos.

***La responsabilidad de la empresa de transportes***

La afiliación de vehículos automotores a una empresa prestadora del servicio público de transporte conlleva una serie de responsabilidades de carácter legal, establecidas en la Ley 336 de 1996. El artículo 36 de esta norma establece: “Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo.”[[1]](#footnote-0)

La responsabilidad solidaria planteada en estos términos implica que la empresa de transporte deberá responder por los créditos en cabeza de cualquiera de sus conductores, derivados de la ejecución de la actividad de transporte. Por lo tanto, este fundamento legal activa la posibilidad de efectuar el cobro directo a la empresa de transporte cuando los perjuicios ocasionados a un tercero sean producto de la responsabilidad de uno de sus vehículos afiliados. Por lo tanto, solicitamos de manera respetuosa que se acojan a nuestras pretensiones.

**NOTIFICACIONES**

***Invitación a llegar a un acuerdo.***

Es interés de Seguros Generales Suramericana S.A. poder invitarlo a que podamos materializar un acuerdo beneficioso para ambas partes que evite desgastes administrativos y judiciales para ambas partes, por lo anterior en caso de que resulte de su interés poder que realicemos acercamientos al respecto, nos permitimos informarle que el recobro del presente siniestro ha sido asignado a la firma de abogados externos BTL Legal Group S.A.S. ubicada en la Avenida 6AN 25N – 22 Piso Tercero, Cali - Valle del Cauca y con números de teléfonos 6686611, , WhatsApp 323 6214498 y correo electrónico [jesilva@btllegalgroup.com](mailto:jesilva@btllegalgroup.com). Empresa con la cual podrá comunicarse en caso de que resulte de su interés poder llegar a un acuerdo para zanjar la presente controversia.

**ANEXOS**

{contenidoAnexos}

Atentamente,



**LINA MARÍA BENÍTEZ FREYRE**

C.C. 1.118.285.299 de Yumbo (V)

T.P. 173.832 del C.S.J.

1. Ley 336 de 1996. Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. Diciembre 20 de 1996.NOTIFICACIONES [↑](#footnote-ref-0)